

**REPÚBLICA DE COLOMBIA****RAMA JUDICIAL****TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN****Medellín, diez (10) de agosto de dos mil veintidós (2022)**

La Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, integrada por los Magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES (ponente), MARIA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ y NANCY GUTIÉRREZ SALAZAR, cumplido el traslado de que trata el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, procede a dictar la sentencia que corresponde en este proceso ordinario instaurado por FRANCISCO ALBERTO ARCILA RAMÍREZ en contra de la ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. y la NACIÓN - MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (Radicado 05001-31-05-017-2021-00198-01).

**ANTECEDENTES:**

Pretende el demandante el reconocimiento de parte de la demandada del retroactivo pensional generado a partir del 01 de abril de 2017 y hasta el 28 de febrero de 2018 con los correspondientes intereses moratorios o en subsidio suyo la indexación de las condenas y las costas del proceso.

Las anteriores súplicas las fundamenta así: Nació el 02 de octubre de 1954, alcanzando sus 62 años el mismo día y mes del año 2016. Actualmente se encuentra afiliado a Porvenir S.A proveniente del RPMPD alcanzando un total de 1.223 semanas. El 07 de noviembre de 2017 radicó la documental necesaria para obtener la garantía de pensión mínima ya que además de la edad, no tiene ingresos superiores al salario mínimo pues se encuentra desempleado y no posee bienes que le generen rentas. Por comunicación

del 12 de marzo de 2018 le fue reconocida la prestación por valor de \$687.442 con base en 13 mesadas anuales a partir del 01 de marzo de 2018 sin que se hubiera reconocido retroactivo pensional pese a que su último aporte se efectuó en marzo de 2017 cuando ya había cumplido los 62 años de edad.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público dio respuesta oportuna a la demanda, oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones. De los hechos adujo que no le constaban los referidos al conflicto presentado con Porvenir S.A., aceptado los demás. Propuso como excepciones de fondo las de falta de legitimación en la causa por pasiva: la oficina de bonos pensionales no funge como entidad de previsión social, ni fondo, ni administrador pensional y cumplimiento de la obligación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - OBP- frente a la emisión del bono pensional a favor del demandante y al reconocimiento de la garantía de pensión mínima.

Porvenir S.A. de su parte, igualmente atendió de manera oportuna el libelo, oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones. Aceptó el reconocimiento de la garantía de pensión mínima en los términos expuestos por la parte, negando el derecho al retroactivo pensional perseguido por estar la autorización de esta prerrogativa en cabeza del Ministerio de Hacienda a través de su Oficina de Bonos Pensionales. Como excepciones de mérito formuló las de Inexistencia de las obligaciones demandadas, cobro de lo no debido, buena fe, falta de causa para pedir, incompatibilidad entre la indexación y los intereses moratorios reclamados y compensación.

El Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Medellín, mediante sentencia del 23 de julio de 2021, ABSOLVIÓ a las demandadas de todas las pretensiones de la demanda, sin imposición de costas procesales.

La Sala en el marco de lo que regula el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, conoce del asunto por el grado de consulta en favor del actor.

En el término pertinente, las partes presentaron sus alegaciones de segunda instancia, con argumentos semejantes a los expuestos en las etapas procesales transcurridas en primer grado.

### **CONSIDERACIONES:**

No es tema de reparo dentro del proceso, que el señor FRANCISCO ALBERTO ARCILA RAMÍREZ nació el 03 de octubre de 1954 (fl.14), de modo que cumplió 62 años de edad ese mismo día y mes del año 2016, siendo reconocida en su favor una garantía de pensión mínima justificada en la Resolución N°17740 del 28 de febrero de 2018 por medio de la cual la Oficina de Bonos Pensionales reconoció el beneficio en el que se incluyó al actor (fl.97), siendo ello comunicado a través de Porvenir S.A por misiva del 12 de marzo de 2018 (fl.30-31), oportunidad en la que se informó el reconocimiento de una mesada por valor de \$687.442 a partir del 01 de marzo de 2018, cuyo pago dio inicio desde ese ciclo (fl. 221).

Bajo ese panorama y atendiendo el grado de consulta, en esta sede el presente debate se circunscribe a esclarecer, si al actor le asiste o no derecho al reconocimiento y pago del retroactivo pensional a partir del 01 de abril de 2017 cuando cesó sus cotizaciones al Sistema, y de ser ello así, la procedencia de los intereses moratorios o en subsidio, la indexación.

Lo primero por decir es que la garantía estatal de pensión mínima de vejez está prevista en el artículo 66 de la Ley 100 de 1993 como una excepción al esquema de ahorro individual que administran los fondos privados de pensiones. En efecto, el legislador previó que, debido a la dinámica económica y fluctuante propia de este régimen, la cuenta pensional no siempre alcanzaría a tener un capital necesario para financiar una pensión de vejez en los términos previstos en el citado artículo 64, pero sí podría representar un importante tiempo de semanas que, a determinada edad, justifican un derecho mínimo pensional. El legislador entonces, lo predefinió en una cantidad de 1150 semanas y unas edades mínimas de 57 años si es

mujer o 62 si es hombre, tal y como lo establece el artículo 65 de la mencionada ley.

Asimismo, el artículo 84 de la ley en cita reglamentado en el 3.º del Decreto 832 de 1996, vigente para la época de los hechos, establecía una excepción a la garantía de pensión mínima que consistía en que esta no procedía si el afiliado recibe otras rentas, pensiones o remuneraciones, cuya suma sea superior al valor que eventualmente correspondería por concepto de garantía de pensión mínima. Por tanto, si eventualmente se percibían ingresos de tal índole, el reconocimiento de la garantía de pensión mínima solo se haría efectiva desde el instante en que se deja de recibirlos (SL4531-2020).

De ese modo lo que ha de entenderse es que, la excepción a la que hace alusión la norma, es un requisito de exigibilidad de la pensión o un elemento del disfrute, más que de la consolidación del derecho o de su causación, por lo que el retroactivo para el beneficio en cuestión se generará desde el momento en que se verifique el cumplimiento de los requisitos de que trata el artículo 65 de la Ley 100 de 1993, salvo que el afiliado reciba otros ingresos que superen el salario mínimo, en tanto su disfrute, solo será posible desde cuando dejó de recibir los ingresos salariales que superaban el valor de la referida prestación (Ver SL4531-2020 y SL641-2022).

Debe anotarse que esa normativa de excepción a la garantía de pensión mínima se mantuvo vigente hasta cuando se derogó por el canon 336 de la Ley 1955 del año 2019, por el cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “*Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad*”, publicada en el Diario Oficial No. 50.964 del 25 de mayo de 2019, significando tal precisión que, para la data en que se dispuso el reconocimiento al actor del beneficio estatal - 28 de febrero de 2018-, el contenido del mencionado artículo 84 le resultaba plenamente aplicable.

Es conveniente acudir al contenido del artículo 16 del Código Sustantivo del

Trabajo, para señalar que las normas sociales al ser de orden público producen un efecto general inmediato, por lo que se aplican a situaciones en curso al momento en que dichas prerrogativas empiecen a regir, lo que quiere decir que los derechos reclamados deben ser dirimidos de conformidad a la ley que rige al momento de la ocurrencia de los hechos, sin que las situaciones consumadas se vean afectadas por la exclusión que haga el legislador con posterioridad, evidenciando ello que a satisfacción del principio de legalidad, la solicitud del promotor de esta litis fue atendida a partir de las normas vigentes a la calenda en que se presentaron los supuestos fácticos cimientos de este caso, cuyo requerimiento para el disfrute de la prestación desapareció cuando la situación estaba más que consolidada con dichas disposiciones (Ver SL641-2022)

Aclarado lo anterior, se tiene que el demandante presentó ante Porvenir S.A declaración juramentada el 20 de febrero de 2018 (fl.206) donde manifestó que para esa data, sus ingresos mensuales alcanzaban la suma de \$2.600.000, generados de un establecimiento de comercio denominado “*papelería school*”, situación que amparada por el contenido del ya plurimentado artículo 84 de la Ley 100 de 1993 implicaba la postergación de la fecha del disfrute de la pensión hasta tanto cesaran los ingresos que superaran el valor de la garantía pedida, pues no se cuenta con probanza que demuestre que para abril de 2017 - causación - o noviembre de ese año - reclamación-, estos ingresos fueran inexistentes, o que previo a ese 20 de febrero de 2018, se hubiera reportado otro tipo de información en cuanto a sus rentas o remuneraciones, pudiendo deducirse de la prueba arrimada, que una vez se dio cumplimiento formal a la disposición legal por medio de esa manifestación, se procedió con el reconocimiento de manera inmediata por acto administrativo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de fecha 28 de febrero de 2018, estando frente al evento en que la causal de postergación no había cesado, lo que apunta a que en el marco de las reflexiones previas, la prestación debió ser incluso concedida en momento posterior al 01 de marzo de 2018, una vez se hubiera determinado que sus ingresos ya no superaban el equivalente a un salario mínimo legal mensual

vigente, no habiendo lugar acorde a dicho análisis al reconocimiento de retroactivo pensional alguno.

Ahora, estando claro que la asignación del subsidio bajo la garantía de pensión mínima es estatal y, por ende, su reconocimiento está exclusivamente en cabeza del Estado - Oficina de Bonos pensionales del Ministerio de Hacienda y crédito público- sin que de su parte se adeude retroactivo alguno por lo precedente, debe decirse que la Corte Suprema de Justicia en la Sala de nuestra especialidad, ha advertido la posibilidad que la AFP Porvenir S.A conforme al artículo 20 del Decreto 656 de 1994, asumiera con recursos propios el retroactivo pensional tratándose de esta garantía de pensión mínima pero a título de sanción, cuando asume un rol pasivo dentro del trámite administrativo a su cargo que conlleva a dilaciones injustificadas para los usuarios, o en todos aquellos casos en los cuales el afiliado no disponga de la totalidad de las sumas a que tendría derecho para atender su pensión por falta de cumplimiento oportuno y adecuado de sus obligaciones por parte de la administradora (Ver SL 196-2019, SL4531-2020, SL2686-2021 y SL1020-2022), sin que en el asunto presente se esté ante tal escenario, en tanto la reclamación del derecho se efectuó el 07 de noviembre de 2017 (fl.14), la Resolución de reconocimiento se emitió el 28 de febrero de 2018 (fl.90-99), y los pagos principiaron en el mes de marzo de 2018 (fl.221) cuando no habían transcurrido cuatro meses, de donde no puede desprenderse actitudes omisivas o ausentes de diligencia y cuidado del Fondo que desembocaran en retrasos perjudiciales para el afiliado, circunstancia que derruye también bajo este postulado, la posibilidad de percibir el actor el retroactivo pensional que deprecia.

En razón a lo anterior, la decisión de primer grado se habrá de confirmar en su integridad. Sin costas en esta instancia, dada la manera como se conoce del asunto.


### DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Cuarta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **CONFIRMA** la sentencia venida en consulta.

Sin costas en esta instancia.

Notifíquese la presente decisión por EDICTO (num.3°, lit. d., art. 41 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social en concordancia con el auto 550-2021 CSJ).

Los Magistrados



CARLOS ALBERTO LEBRÓN MORALES

**MARIA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ**  
SIN FIRMA POR AUSENCIA JUSTIFICADA



**NANCY GUTIÉRREZ SALAZAR**

**REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO  
SALA LABORAL**



**SECRETARÍA**

**EDICTO**

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

**HACE SABER:**

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

<b>Radicación:</b>	<b>05001310501720210019801</b>
<b>Proceso:</b>	<b>Ordinario</b>
<b>Demandante:</b>	<b>FRANCISCO ALBERTO ARCILA RAMIREZ</b>
<b>Demandado:</b>	<b>A.F.P. PORVENIR S.A.</b>
<b>M. P.</b>	<b>CARLOS ALBERTO LEBRUN MORALES</b>
<b>Fecha de fallo:</b>	<b>10/08/2022</b>
<b>Decisión:</b>	<b>CONFIRMA</b>

El presente edicto se fija por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibidem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy 11/08/2022 desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

**RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS**

Secretario